



República de Colombia
Rama Judicial
**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
PRESIDENCIA**

Resolución No. 52 del 4 de junio de 2015

"Mediante la cual se decide el pedimento de revocatoria directa planteado por el Magistrado Jorge Alirio Cortés y la constancia en ese mismo sentido presentada por el Magistrado Ramiro Aponte Pino en contra de la Resolución 047 de 25 de mayo de 2015"

ASUNTO A RESOLVER:

En atención a lo solicitado mediante oficio No. 043 del 26 de mayo de 2015 signado por el Magistrado Jorge Alirio Cortés y la comunicación sin número adiada 28 de mayo del presente año suscrita por el también Magistrado Ramiro Aponte Pino, se proceden a resolver, en su orden, los pedimentos de "revocatoria directa" y la solicitud de llevar a la Sala el tema de publicar en la página web las actas de Salas Plenas y de Gobierno del Tribunal Administrativo del Huila por carecer la Presidencia de competencia para tales efectos, en ellos contenidos, con los fundamentos de derecho que a continuación expongo, aclaran que hasta la fecha no se le ha dado aplicación real al acto atacado por motivos logísticos.

CONSIDERACIONES:

Las funciones del Presidente de todo Tribunal Administrativo de Colombia vienen detalladas y regladas, respectivamente, por la Constitución de 1991, por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, y (reglamentaria e inicialmente, en lo pertinente) en el Acuerdo No. 209 de 1997 que en el literal p) de su artículo 18 contempla dentro de su órbita funcional:

*"p) Las demás que señalen **la ley y los acuerdos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.**" (Bastardillas fuera de texto).*

En este sentido corresponde al Presidente de dichas Corporaciones hacer las labores pertinentes para lograr la aplicación directa y oportuna de la Ley¹, aspecto en el cual no está obligado a llevar el asunto a discusión en Sala Plena, entendiendo que uno de las características de la ley es la de ser de obligatorio acatamiento tanto

¹ Entiéndase comprendida también la Carta Política.

para los particulares, como para los servidores públicos, siendo que- para los últimamente nombrados- se exige la correspondiente diligencia de posesión y juramento en los términos del canon 122 – 2 de la Carta Magna, y su desconocimiento genera responsabilidad conforme lo precisa el precepto 6º *ejusdem*.

Por ende -y a contrario sensu de lo antes dicho- el literal t) del artículo 5º del Acuerdo No. 209 de 1997 contempla como función de las Salas Plenas de los Tribunales Administrativos:

“t) Expedir las normas que regulen los aspectos de funcionamiento interno que no hayan sido contempladas en la ley o en el presente reglamento y que sean compatibles con aquellos.” (Negrillas fuera de texto).

Por ende, la función de regulación de los asuntos internos del Tribunal por parte de la Sala Plena, tendrá como prerrequisito que exista vacío legal y reglamentario, pues de existir regulación legal y reglamentaria será el Presidente quien asuma su cumplimiento.

Dentro de ese contexto, por medio del acto ejecutivo y de cumplimiento contenido en la Resolución No. 047 de 25 de mayo de 2015 atacada, procedimos a acatar la publicidad dispuesta en materia de actas de Salas Plena y de Gobierno del Tribunal Administrativo del Huila conforme lo disponen los artículos 228 de la Carta Política, 57 de la ley 270 de 1996, 3º (numeral 8), 8º y 122 de la Ley 1437 de 2011 y el Acuerdo 209 de 1998 - artículo 18 literales a), c) y p) - proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, normativa que deben armonizarse con otras normas positivas por sentido útil, por eficacia y eficiencia, como son la Ley de Comercio Electrónico (527 de 1999), el artículo 21 de la Ley General de Archivo (594 de 2000) reglamentado por medio del Decreto 2609 de diciembre 14 de 2012 y los artículos 1, 8 y 10 del Acuerdo No. PSAA14-10161 del 12 de junio de 2014 emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que le otorga practicidad al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad para aplicar estándares de excelencia, fomentando la investigación, el desarrollo y la innovación en los procesos y procedimientos administrativos y de gerencia del Tribunal Administrativo del Huila.

Por demás, el artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 que consagra, entre otros, los principios de transparencia y publicidad emanó de la iniciativa legislativa del Consejo de Estado y se encuentra vigente por no haber sido afectado con el fenómeno de la reviviscencia de parte del CCA acuñado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del mismo Consejo de Estado en concepto del 28 de enero de 2015

cuyo ponente es el Dr. **ÁLVARO NAMÉN VARGAS**, aclarando que la normativa aplicable en la actualidad para garantizar el derecho de petición está conformada por:

- Los artículos 23 y 74 de la Constitución.
- Los tratados internacionales suscritos y ratificados por Colombia que regulan el derecho de petición, entre otros derechos humanos.
- Los principios y las normas generales sobre el procedimiento administrativo de la Parte Primera, Título I, del CPACA, así como las demás normas vigentes de dicho código que se refieren al derecho de petición o que, de una u otra forma, conciernen al ejercicio del mismo (notificaciones, comunicaciones, recursos y silencio administrativo).
- Las normas especiales contenidas en otras leyes que regulan aspectos específicos del derecho de petición o que se refieren a este para ciertos fines y materias particulares.
- La jurisprudencia vigente, especialmente aquella proveniente de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado.
- Entre el 1º de enero del 2015 y la fecha anterior al momento en que empiece a regir la nueva ley estatutaria sobre el derecho de petición, las normas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI y, parcialmente, el VIII del CCA.

En ese orden se recuerda que el 27 de enero del 2015, la Corte Constitucional publicó el texto completo de la Sentencia C-951 y le comunicó al Gobierno y al Congreso la decisión adoptada. Sin embargo, el Ejecutivo aún no ha sancionado el proyecto de ley estatutaria, por lo que, a la fecha, no se ha cumplido con el requisito previsto en el numeral 4º del artículo 157 de la Constitución para que sea ley de la República.

Precisamente, ese precepto 3º de la Ley 1437 de 2011 plantea el principio de transparencia con base en la publicación de información no reservada en las páginas web oficiales y debe armonizarse con otras normas positivas por sentido útil, por eficacia y eficiencia, como son la Ley de Comercio Electrónico (527 de 1999), el artículo 21 de la Ley General de Archivo (594 de 2000) reglamentado por medio del Decreto 2609 de diciembre 14 de 2012 y los artículos 1, 8 y 10 del Acuerdo No. PSAA14-10161 del 12 de junio de 2014 emanado de la Sala



Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que le otorga practicidad al Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y nos obliga a adoptar buenas prácticas en materia de calidad, control y protección ambiental, aspecto en el destacamos el principio de precaución utilizado por los Magistrados **Ramiro Aponte Pino, Jorge Alirio Cortés y Enrique Dussan Cabrera** en la providencia librada dentro del proceso de acción popular con radicación 41 001 23 33 000 2014 00524 00, a través de la cual suspendieron el llenado de la represa de El Quimbo, criterio según el cual *"para evitar un daño ambiental se deben tomar medidas eficaces, así no exista la suficiente certeza científica de su ocurrencia"* y que mutatis mutandis tiene aplicación en el presente asunto administrativo.

Por otra parte, refulge diáfano que la figura de la revocatoria directa no procede por la violación de normas reglamentarias y en el pedimento del Dr. Jorge Alirio Cortes no se identifica norma constitucional o legal afectada por la decisión, y simplemente se finca en el literal t) del artículo 5º del Acuerdo No. 209 de 1997 para inferir que la competencia para regular la aplicación de la publicación en la página web del Tribunal Administrativo del Huila de las actas de Salas Plena y Sala de Gobierno regulada por los artículos 228 de la Carta Política, 57 de la ley 270 de 1996, 3º (numeral 8), 8º y 122 de la Ley 1437 de 2011 y el Acuerdo 209 de 1998 - artículo 18 literales a), c) y p) - proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, normas que deben armonizarse con otras normas positivas por sentido útil, por eficacia y eficiencia, como son la Ley de Comercio Electrónico (527 de 1999), el artículo 21 de la Ley General de Archivo (594 de 2000) reglamentado por medio del Decreto 2609 de diciembre 14 de 2012 y los artículos 1, 8 y 10 del Acuerdo No. PSAA14-10161 del 12 de junio de 2014 emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que le otorga practicidad al Sistema Integrado de gestión de la Calidad, debe estar fincado en Sala Plena y no en la Presidencia, lo cual no es acertado conforme vimos al inicio de la presente decisión, toda vez que el factor que excluye la competencia de la Sala Plena para expedir el acto administrativo contenido en la resolución 047 de 25 de mayo de 2015 se encuentra en la aplicación del artículo 5 del acuerdo No. 209 de 1997 numeral (t) según el cual le corresponde a la Sala Plena: *"Expedir las normas que regulen los aspectos de funcionamiento interno que no hayan sido contempladas en la ley, o en el presente reglamento y que sean compatibles con aquellos" (se destaca).*

Sin hacer mayor elucubración jurídica para entender que las normas en que se apoya la resolución que se pretende atacar por vía de la revocatoria directa, son razones de orden constitucional y desarrollado legalmente en la Ley 270 de 1996- Estatutaria de Administración de Justicia- las que sustentan nuestro proveído, y, en este orden de ideas, ello no es susceptible de debate alguno, por la Sala Plena de



la Corporación (ni siquiera por razones de decoro o cortesía) siendo preocupante que se quiera ver ello como un actuar indecoroso y contrario derecho por parte del suscrito, ya que, antes por el contrario, la resolución tiene fundamento constitucional, legal y reglamentario, lo cual no puede quedar supeditado a una decisión de Sala sino darle aplicación inmediata por parte del Presidente, habida cuenta que el tema que aquí nos ocupa y que recae en la publicidad para las actas contentivas de las decisiones adoptadas en las Salas Plena y de Gobierno del Tribunal Administrativo del Huila, es un tema de juridicidad objetiva, hecho éste que se aparta de su discusión en Sala, se recalca, a la luz del artículo 5 del acuerdo No. 209 de 1997 literal "t)", por lo que como presidente del Tribunal ostento toda la competencia para expedir el acto ejecutorio y de cumplimiento reseñado.

Ahora, como en su escrito de revocatoria directa el señor Magistrado Cortés manifiesta: *"la presidencia que usted regenta es una dignidad que tuvimos a bien entregarle para ser el vocero y representante de la Corporación..."*, debe destacarse que olvida el resto de las funciones propias de la Presidencia siendo la más importante la de ser garante del acatamiento del ordenamiento jurídico máxime cuando se está en presencia del cumplimiento del deber legal que es propender la aplicación de la Constitución Política, la ley y los reglamentos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, como es el caso de la publicidad para las decisiones adoptadas en las Salas Plena y de Gobierno del Tribunal Administrativo del Huila, pues de lo contrario el Presidente de la Corporación quedaría reducido a una figura inerte frente al cumplimiento de la ley, lo cual se aleja de toda lógica funcional en los términos del literal p) del artículo 18 del Acuerdo No. 209 de 1997 emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, siendo que el entender dialéctico de la norma citada cerró la posibilidad de discusión alguna o debate entre pares cuando el tema viene resuelto previamente por la constitución, la ley y los reglamentos. Por ende, de manera clara y con absoluto convencimiento, como Presidente del Tribunal Administrativo del Huila, expedí la resolución No. 047 de 2015, y no como titular del despacho que dirijo, como erróneamente lo asevera el Magistrado Cortés.

Improcedencia para el presente caso de la Revocatoria Directa. Se entiende esta figura jurídica como una prerrogativa que tiene la administración para enmendar, en forma directa o a petición de parte, sus actuaciones contrarias a **la Ley o a la Constitución**, que atenten contra el interés público o social o que generen agravio injustificado a una persona, lo cual aquí no acontece y por ende no se puede enmendar o corregir actuación alguna, pues la decisión que se pretende vanamente revocar directamente no tuvo finalidad distinta a conseguir la aplicación de la ley al interior de nuestra Corporación Judicial en orden a ajustar los



procedimientos a lo instituido por la normatividad constitucional, legal y reglamentaria vigente y la cual fue fundamento normativo de la Resolución No. 047 de 25 de mayo de 2015, y si ello no se había realizado desde el mismo momento de asumí como Presidente, fue debido a los problemas de funcionamiento que mostraba nuestra página web conforme lo venía manifestando la Dra. MARÍA PIEDAD VASQUEZ en su calidad de Relatora del Tribunal Administrativo del Huila, por lo que -superados los mismos- y siendo exaltado recientemente el Tribunal Administrativo del Huila como Tribunal Piloto en la Actualización del Software de la Página Web de la Rama Judicial Justicia Siglo XXI correspondiente a la Administración Judicial, no existe excusa valedera que nos permita permanecer aislados tecnológicamente y lo que nos corresponde es estarnos a la realidad y a la legalidad, haciéndose claridad en que la mencionada resolución no es impuesta por el Presidente de esta Corporación, habida cuenta que obedece a la aplicación integral de la juridicidad y *dura lex, sed lex*, siendo apenas el primer acto de un conjunto de actuaciones que debemos emprender y materializar a futuro en orden a ponernos a tono e interactuar con el mundo digital y con las exigencias de los ámbitos nacional e internacional.

Como corolario de lo antes dicho se negarán parcialmente los pedimentos estudiados, pues en cuanto a la temática de la grabación de las sesiones de las Salas Plenas y de Gobierno se aprecia que, en efecto, ello debe ser sometido al conocimiento de la Sala Plena por no estar expresamente dispuesto por la Ley, y en ese sentido se procederá a revocar directamente el ARTÍCULO SEGUNDO de la plurimentada resolución 047 de 25 de mayo de 2015 y en cuanto a lo sumamente complicado y desgastante que resultaría publicar las actas de los últimos 3 años conforme lo ha manifestado verbalmente al suscrito la Dra. MARÍA PIEDAD VÁSQUEZ (Relatora del Tribunal), acogiendo el principio de economía de que trata el numeral 12 del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011 se revocará directa y parcialmente el ARTÍCULO TERCERO de la resolución 047 de 25 de mayo de 2015, en la publicación digital de las actas con 3 años de antigüedad, debiéndose limitar la orden a la publicación de las actas referentes a las sesiones de Sala Plena del presente año y las que se surtan en lo sucesivo, haciendo de todas formas la advertencia pública en dicha página web sobre el acceso que se puede tener a las actas de Salas Plena y de Gobierno anteriores (salvo en aquellas en las que consten actuaciones y decisiones judiciales o disciplinarias de carácter individual, de grupo o colectivos, a las cuales sólo tendrán acceso los sujetos procesales²) mediante el ejercicio del derecho de petición, amén de aclarar que la publicación digital de las actas debe hacerse con base en fechas y de todas formas será necesario que el

² En esta clase de asuntos disciplinarios se elaborará acta independiente y autónoma la cuál permanecerá custodiada en Presidencia.

usuario o usuarios hagan clic izquierdo en el correspondiente enlace a efectos de descargarlas, tomándose esa acción positiva como la presentación formal de un pedimento de petición de información.

Por último como quiera que la página web del Tribunal Administrativo del Huila es del medio de comunicación amplio, idóneo y directo de la Corporación también se revocará parcialmente el ARTÍCULO CUARTO de la resolución 047 de 25 de mayo de 2015 en lo atañedor a la orden de publicación de la decisión anterior y de la presente a través de su inserción en un medio de difusión local, pues estaríamos lesionando el principio de economía contemplado en el numeral 12 del artículo 3º de la Ley 1437 de 2001.

Por lo antes dicho, el suscrito Presidente del Tribunal Administrativo del Huila, en uso de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias que le vienen conferidas,

RESUELVE:

Artículo Primero.- Negar parcialmente los pedimentos estudiados en lo que tiene que ver con la publicación de las actas de Salas Plena y de Gobierno, lo cual deberá realizarse en los términos que vienen aquí reseñados.

Artículo Segundo.- Revocar directamente el ARTÍCULO SEGUNDO de la resolución 047 de 25 de mayo de 2015 referente a la orden de grabación de las sesiones de Salas Plena y de Gobierno del Tribunal Administrativo del Huila.

Artículo Tercero.- Revocar directa y parcialmente el ARTÍCULO TERCERO de la resolución 047 de 25 de mayo de 2015 en lo que tiene que ver con la publicación de las actas de Salas Plena y de Gobierno del Tribunal Administrativo del Huila elaboradas desde hace tres años, limitándose la orden a la publicación de las actas referentes a las sesiones de Sala Plena del presente año y las que se surtan en lo sucesivo, haciendo de todas formas la advertencia pública en dicha página web sobre el acceso que se puede tener a las actas de Salas Plena y de Gobierno anteriores (salvo en aquellas en las que consten actuaciones y decisiones judiciales o disciplinarias de carácter individual, de grupo o colectivos, a las cuales sólo tendrán acceso los sujetos procesales³) mediante el ejercicio del derecho de petición, amén de aclarar que la publicación digital de dichas actas debe hacerse con base en fechas y de todas formas será necesario que el usuario o usuarios hagan clic izquierdo en el correspondiente enlace a efectos de descargarlas, tomándose esa acción positiva como la presentación formal de un pedimento de

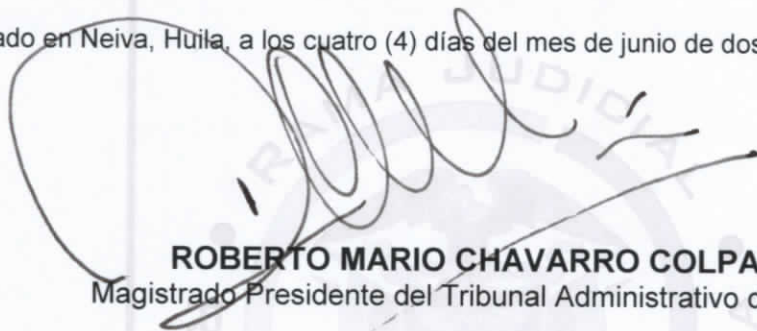
³ En esta clase de asuntos disciplinarios y judiciales se elaborará acta independiente y autónoma las cuales permanecerán custodiadas en Presidencia.

petición de información.

Artículo Cuarto.- Revocar directa y parcialmente el ARTÍCULO CUARTO de la resolución 047 de 25 de mayo de 2015 en lo atañero a la orden de publicación de la decisión anterior y de la presente a través de su inserción en un medio de difusión local.

NOTIFÍQUESE A LOS MAGISTRADOS JORGE ALIRIO CORTÉS Y RAMIRO APONTE PINO, PUBLÍQUESE EN CARTELERA, COMUNÍQUESE A LOS DEMAS MAGISTRADOS QUE INTEGRAN ESTA CORPORACION, A SECRETARÍA, RELATORÍA, AL TÉCNICO DE SISTEMAS ASIGNADO A LA CORPORACION Y CÚMPLASE.

Dado en Neiva, Huila, a los cuatro (4) días del mes de junio de dos mil quince (2015).



ROBERTO MARIO CHAVARRO COLPAS
Magistrado Presidente del Tribunal Administrativo del Huila

